

Modelo de intervención preventiva frente a la trata de personas en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia de Chile

Colección **Documentos de trabajo** n° 20

Serie **Guías y manuales**
Área **Justicia**



Modelo de intervención preventiva frente a la trata de personas en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia de Chile

Documento de Trabajo nº 20

Serie: Guías y manuales

Área: Justicia



PROGRAMA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA

Edita

Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosociasocial-ii.eu
info@eurosociasocial-ii.eu

Con la colaboración de:

Expertise France



Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo
International Development Law Organization



Ministerio de Justicia



La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

Edición no venal.

Realización gráfica:

Marta Rojas

Chile, 2014



No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Autores

Equipo técnico

Andrés Vazquez

Denisse Araya Castelli

María Macarena Car Silva

Olga Lucía Pérez (Coordinadora)

Con la participación del Ministerio de Justicia de Chile:

Departamento de Asistencia Jurídica, División de Asistencia Judicial

Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ)

Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI)

Oficinas de Defensa Laboral (ODL)

Agradecimientos

Elena Incisa di Camerana, cordinadora regional para América Latina y el Caribe, IDLO, socio operativo EUROSociAL

Xavier Cousquer, coordinador temático de las áreas de Justicia y Seguridad, Expertise France, socio coordinador EUROSociAL

Índice

| | |
|--|----|
| Siglas | 7 |
| Presentación | 9 |
| Introducción | 11 |
| Modelo de intervención preventiva frente a la trata de personas en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia de Chile..... | 14 |
| Cómo enfrentar la intervención..... | 14 |
| Primer encuentro – primera acogida..... | 15 |
| Ingreso al Sistema de Protección | 17 |
| Prevención de trata de personas en el marco de la perspectiva de derechos | 20 |
| Obligaciones relativas a la prevención de la trata de personas | 21 |
| Enfoque de derechos..... | 23 |
| Toda persona humana es titular de derechos, todo Estado es portador de deberes | 24 |
| La garantía de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad..... | 25 |
| Prohibición de la esclavitud y servidumbre como responsabilidad del Estado..... | 27 |
| Consentimiento dado por la persona que es víctima | 28 |
| Principios específicos para la orientación legal y la atención de personas | 28 |
| Normas internacionales de protección frente a la trata de personas complementarias al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo) | 31 |
| Protección general a todas las personas frente a la trata | 32 |
| Protección de personas migrantes y desplazadas frente a la trata de personas | 38 |

| | |
|---|----|
| Protección de niños, niñas y adolescentes de ambos sexos frente a la trata de personas | 39 |
| Protección de personas según su género frente a trata de personas..... | 43 |
| Protección de personas indígenas frente a la trata de personas | 45 |
| Normas nacionales de protección frente a la trata de personas complementarias al Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) | 47 |
| La protección y el tratamiento de las víctimas de trata de personas | 49 |
| Pautas generales de abordaje psicosocial para la atención de personas potencialmente víctimas de trata..... | 52 |
| Algunos signos que puede presentar una persona vulnerada por el delito de trata, en cualquiera de sus manifestaciones (laboral, sexual, u otra) | 54 |
| Indicadores generales de vulneración de derechos frente a formas de explotación vinculadas a trata de personas | 54 |

Siglas

| | |
|-------------------|---|
| 100 Reglas | 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad |
| CAJ | Corporaciones de Asistencia Judicial |
| CAVI | Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos |
| CEDAW | Convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres |
| CIVM | Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) |
| CTM | Convención para la protección de todas las personas trabajadoras migrantes y sus familiares |
| DADDH | Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre |
| DDPI | Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas |
| DOIG | Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas |
| DUDH | Declaración Universal de Derechos Humanos |
| ODL | Oficinas Defensoría Laboral |
| PIDCP | Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos |
| PIDESC | Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pacto de San José) |
| PSS | Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) |
| RAV | Red de Asistencia a Víctimas |

Presentación

Uno de los desafíos de la respuesta institucional frente a la trata de personas es el abordaje preventivo. Esto es, proveer soluciones a aquellas personas que por distintos motivos se encuentran ante una situación de vulneración de derechos que las expone a explotación y trata, antes de que sus derechos sean vulnerados. El abordaje más tradicional a la trata de personas se ha dado desde la perspectiva de la lucha criminal en donde la persona que es víctima se relaciona con el Estado desde la investigación penal, que con mayor o menor protección, siempre se genera dentro del ámbito investigativo y luego de que los derechos fueron vulnerados.

El Modelo de intervención preventiva frente a la trata de personas que este documento de trabajo presenta, fue concebido como una herramienta de doble uso: de una parte, como guía para la atención directa de personas identificadas como potenciales víctimas de trata de personas, que complementa el Protocolo de atención diseñado para las CAVI¹ y, de otra, como documento base para la formación y capacitación de los y las responsables de la atención directa en instancias dependientes o bajo el ámbito de actuación del Ministerio de Justicia.

Esta iniciativa tiene su fuente, de un lado en la Ley de Trata de Personas (Ley N° 20.507, publicada en el Diario Oficial el 8 de abril de 2011) promulgada en el año 2010 con base en las normas internacionales de Derechos Humanos en la materia y que rige y organiza la respuesta estatal para la prevención, combate y asistencia. De otro, en las modificaciones al Código Penal que reglamenta la creación de una Mesa de Prevención y Combate a la Trata de Personas coordinada por el Ministerio el Interior. Esta instancia que tiene el carácter de comisión asesora de carácter permanente con composición interministerial e intersectorial es la encargada de coordinar las acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, represión y sanción de la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños.

A su vez, el Ministerio de Justicia, en el marco de la coordinación de la Red de Asistencia a Víctimas (RAV) a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), definió

1. Ver Documento de Política No. 19 en <http://eurosocial-ii.eu/es/biblioteca/>

en el 2013² el Protocolo de atención a víctimas del delito de trata de personas en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos³, una estrategia de divulgación de derechos orientada al ámbito de comunicación interna del Ministerio y un mensaje institucional para sensibilizar a quienes hacen parte de la función pública a desnaturalizar los factores de explotación laboral y sexual: “Trata de personas: ese no es tu trabajo (eso es explotación laboral, es explotación sexual, etc.)”.

De la experiencia de trabajo para el diseño de este modelo de intervención preventiva frente a la trata de personas en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, surgen los siguientes hallazgos y recomendaciones:

- Se detectaron brechas importantes en cuanto a conocimientos de derechos humanos, de tipos penales del delito de trata de personas. Se sugiere que se establezca un plan de capacitación y actualización a todas las instancias de atención directa. Asimismo se recomienda que la formación de profesionales de derecho, psicología y trabajo social, incorpore la perspectiva de derechos en la atención directa de personas vulnerables a los fenómenos de explotación y trata de personas.
- Teniendo presente que las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) son cuatro para todo el territorio nacional, se sugiere que se mantenga una coordinación nacional para el tema y en particular para la implementación del modelo, a cargo del Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia. Existiendo esta coordinación nacional, esta debería contar con un plan de acción anual en materia preventiva.
- Asimismo, se sugiere crear coordinaciones regionales entre las Oficinas de Defensora Legal (ODL) y los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de cada Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), a fin de trabajar en conjunto este y otros temas comunes. Se sugiere que estas instancias de coordinación se reporten a la coordinación central del Departamento de Asistencia Jurídica.

Con la definición e implementación de este modelo de intervención preventiva frente a la trata de personas, el Ministerio de Justicia propone un marco para actuar articuladamente con la sociedad desde un espacio de escucha, contención y confianza en el que las personas que se encuentran en especial situación de vulneración puedan prevenir ser víctimas de cualquier forma de explotación y trata de personas.

2. Realizados en el marco de la Acción de Acceso al Derecho del área de justicia del Programa EUROsocial II con el que el Ministerio de Justicia de Chile busca fortalecer y especializar el sistema público nacional de asistencia jurídica gratuita en la detección, abordaje intersectorial y tratamiento de las víctimas del delito de trata de personas y tráfico de inmigrantes.

3. Ibid, cita 1.

Introducción

Las actuales investigaciones relativas a trata de personas dan cuenta de que en la pasada década, la trata de personas ha alcanzado proporciones epidémicas y que incluyen a casi todos los países del mundo. El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo contra la trata de personas) define la trata de personas con el propósito de proporcionar una base común para la prevención de la trata, la penalización de los ofensores y las medidas de protección para las víctimas.¹

Chile es considerado como un país de origen, tráfico y destino de víctimas de trata con fines de explotación, en particular del tipo laboral y sexual, por la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito. Asimismo, organizaciones nacionales e internacionales han documentado trata interna con diversos fines que tiene como víctimas tanto a personas adultas como a niños, niñas y adolescentes. Ambos tipos de trata varían conforme a las características productivas y geográficas del país encontrándose formas de explotación que van desde la explotación sexual en calle y en burdeles (quilombos), o explotación laboral en minería, actividades agrícolas, ganaderas y de producción que incluyen a personas extranjeras y nacionales indígenas y no indígenas.

El fenómeno de la trata de personas en Chile se caracteriza por una acentuada convivencia de situaciones de trata de personas, tanto transnacional como interna, y tráfico ilícito de personas migrantes. Si bien en muchos países ocurre un fenómeno similar, el crecimiento económico y el imaginario de la búsqueda de mejores oportunidades para el desarrollo, han generado una corriente migratoria, mayoritariamente regional,² que no escapa de contar con problemas de violaciones de derechos de las personas que son migrantes.

1. UNODC, Serie Estudio de Casos: Trata de Personas, Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Viena, 2010.

2. Hasta el año 1982 el fenómeno migratorio se caracterizó por la mayor presencia de personas de origen europeo, la existencia de corrientes árabes y otra pequeña del lejano oriente. [...] Luego, con el advenimiento de la democracia y la reconocida estabilidad de Chile en la región esta tendencia inmigratoria se consolida. Fuente: Informe “Evolución de la gestión gubernamental desde 1990: desarrollo del fenómeno de las migraciones en Chile”, Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Disponible en: <http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/migraciones.pdf>. Consultado el 16 de septiembre de 2014.

Referirse a personas trabajadoras en situación administrativa irregular en cuanto a su condición migratoria, trata de personas o a tráfico ilícito de personas migrantes no es lo mismo (tabla 1). En relación con la trata y el tráfico, aunque en términos generales se podría decir que en el primero el sujeto vulnerado es la persona humana mientras que en el segundo el sujeto vulnerado es el Estado, lo cierto es que en ambos casos nos estamos refiriendo a distintas situaciones que, al menos, ponen en riesgo de vulneración a derechos fundamentales de las personas tales como la vida, la integridad física o la libertad, entre otros. En el caso de la trata de personas la explotación es el fin fundamental. Son formas de explotación diversas que incluyen, pero no se limitan, a la explotación sexual, la laboral, los trabajos forzados, la esclavitud o la extracción de órganos.

La cuestión de las personas migrantes en situación administrativa irregular no está exenta del fenómeno de la explotación. Sea o no como consecuencia del tráfico ilícito de migrantes, muchas de las personas que se encuentran en un país son vulnerables a la explotación por parte de personas, grupos organizados o entidades y la responsabilidad estatal también incluye, además de la prevención y eliminación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales y clandestinos de los trabajadores migratorios en situación irregular.

Tabla 1. Comparación entre trata, tráfico y explotación de personas trabajadoras migrantes

| Trata de personas | Tráfico ilícito de personas migrantes | Beneficio de la situación irregular de personas migrantes |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • La acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, • recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra • con fines de explotación. | <ul style="list-style-type: none"> • La facilitación de la entrada ilegal: • de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, • con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. | <ul style="list-style-type: none"> • La difusión de información engañosa en lo concerniente a la emigración y la inmigración; • movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares; • personas, grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular. |

Fuente propia a partir de los Protocolos de las Naciones Unidas sobre Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Entre las medidas que deben tomar los Estados partes cabe señalar: a) medidas contra la difusión de información engañosa en lo concerniente a la emigración y la inmigración; b) medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos o presten asistencia a tal efecto; c) medidas para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular.³

En todos los casos, en tanto se identifique a una persona como potencial víctima de trata o de riesgo de vulneración o en situación de vulneración de derechos por encontrarse en situación administrativa irregular en cuanto a su estado migratorio, se deberá presumir el carácter de víctima. Sin duda, se presenta principalmente la controversia al respecto de las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. El principio general que se ha adoptado en el marco de derechos humanos es la protección de la persona humana expuesta a la vulneración de derechos y sanción a la persona o grupo de personas que lucran o se benefician de la situación de vulneración.

El artículo 9 del Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores migrantes,⁴ aunque no ratificado por Chile, establece una guía sobre cuál es la perspectiva general de abordaje de la situación de trabajadores “indocumentados”:

1. Sin perjuicio de las medidas adoptadas para controlar los movimientos migratorios con fines de empleo, que aseguren que los trabajadores migrantes ingresen en el territorio nacional y sean admitidos al empleo de conformidad con la legislación pertinente, el trabajador migrante deberá, en los casos en que dicha legislación no haya sido respetada y en los que su situación no pueda regularizarse, disfrutar, tanto él como su familia, de igualdad de trato en lo concerniente a los derechos derivados de empleos anteriores en materia de remuneración, seguridad social y otros beneficios.
2. En caso de controversia sobre los derechos a que se refiere el párrafo anterior, el trabajador deberá tener la posibilidad de defender sus derechos ante un organismo competente, ya sea personalmente o por intermedio de sus representantes.
3. En caso de expulsión del trabajador o su familia, no deberían estos correr con los costos de la expulsión.

3. Artículo 68 de la Convención para la protección de todas las personas trabajadoras migrantes y sus familiares, ratificada por Chile el 21 de marzo del año 2005.

4. Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (entrada en vigor: 9 de diciembre de 1978; adopción: Ginebra, 60ª reunión CIT, 24 de junio de 1975).

4. Nada en el presente Convenio impedirá a los miembros la concesión, a las personas que residen o trabajan de manera ilegal en el país, del derecho a permanecer en él y ser legalmente empleadas.

En el segundo párrafo del artículo 68 de la Convención para la Protección de todas las personas migrantes y sus familiares, se dispone que “los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar la contratación de trabajadores migratorios en situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones a los empleadores de esos trabajadores”. Esas medidas deben leerse conjuntamente con las disposiciones del artículo 35⁵ y el artículo 69.1, donde se dispone que “los Estados partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista”. En el artículo 69.2, se estipula además que “cuando los Estados partes interesados consideren la posibilidad de regularizar la situación de dichas personas de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán debidamente en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo y otras consideraciones pertinentes”, en particular las relacionadas con su situación familiar.

Modelo de intervención preventiva frente a la trata de personas en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia de Chile

Cómo enfrentar la intervención

Dado que la trata de personas es un crimen abominable contra los derechos fundamentales de la persona, es necesario abordarla desde un enfoque de derechos humanos, no solo desde la persecución del delito (ley y orden).

De allí que, en primer lugar, debemos recordar y comprender la difícil *ruta que la persona ha vivido en la trata de personas*, a fin de distinguir y precisar sus necesidades, inicialmente prioritarias y luego las de más largo aliento.

Posteriormente, terceros inician una serie de otros pasos, donde la persona víctima participa: para cada uno de estos pasos, se deben tener en cuenta las necesidades de la víctima.

5. El artículo 35 de la Convención para la protección de todas las personas trabajadoras migrantes y sus familiares dispone que “ninguna de las disposiciones de la presente parte de la Convención se interpretará en el sentido de que implica la regularización de la situación de trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación irregular, o el derecho a que su situación sea así regularizada, ni menoscabará las medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y equitativas para la migración internacional previstas en la parte VI de la presente Convención”.

Lo que se desconoce:

- Captación en país o ciudad de origen; oferta de una oportunidad laboral de cualquier índole.
- Traslado-trayecto al país o ciudad donde se explotará sexual o laboralmente.
- Llegada (recepción) al país o ciudad de destino donde se inicia la explotación.

Primer encuentro – primera acogida

Considerando que la persona se encuentra en una situación altamente compleja, donde prima la desconfianza y probablemente en un estado de crisis, angustia, temor, en el primer encuentro es primordial acogerla, escucharla, contenerla emocionalmente, favorecer, paulatinamente, la vinculación con aquellos/as que se encontrará en el futuro proceso que va a iniciar, evaluar el riesgo psicosocial y de salud en general. Algunas actitudes que favorecen la acogida y empatía son:

- Expresarle preocupación e interés por lo sucedido.
- Mantener una escucha activa, es decir, estar atento a la persona, al contenido y emociones que expresa. Efectuar gestos y expresiones verbales que muestren que, efectivamente, se le está escuchando.
- Aceptar lo que expresa y siente identificando las emociones que surgen de su relato, reflejándole, resumiendo lo que él o ella expresa.
- Verbalmente empatizar con él o ella, poniéndose en su lugar, “comprendo cómo se siente”. Mostrando genuino interés y aceptación por la persona y su experiencia.
- Adecuarse a las necesidades de la víctima.
- Brindarle el espacio para que puede hablar y sentir lo ocurrido: “si se siente cómodo, y si usted quiere, me puede contar lo sucedido”.
- En todos los casos, pero especialmente en aquellos en que la víctima está con síntomas visibles de angustia, ansiedad, entre otros, normalizar estas reacciones a las que ha hecho referencia, como por ejemplo, “es totalmente normal y común que le cueste dormir, es natural que se sienta confundido/a”.
- Reforzar, valorar las estrategias de sobrevivencia, de enfrentamiento que él o ella ha empleado.
- Respetar los tiempos de las víctimas para hablar, sus silencios, otros. Si la persona llora, permitirle, dándole su tiempo, manteniendo silencio y respetando su expresión.

- Agradecer la apertura, la confianza que ha depositado en nosotros/as
- Brindar información precisa, oportuna y necesaria.

Es también importante *evitar algunas actitudes* que puedan entorpecer la vinculación y acogida, como por ejemplo:

- Efectuar múltiples preguntas sin escuchar ni mirar a la persona, o bien en un tono seco, brusco, hostil e incluso preguntas innecesarias.
- Interrumpir su relato o cambiar de tema repentinamente, hablarle con demasiados tecnicismos difíciles de comprender para la víctima. Apurarle o presionar para que relate rápidamente la experiencia, presionarla demandándole más información de la que él o ella puede o quiere entregar.
- Criticarla, juzgarla, culpabilizándola o responsabilizando a la víctima por sus comportamientos, cuidando y evitando emplear frases como: “Pero igual podías salir ¿por qué no te arrancaste y fuiste con la policía? ¿Por qué aguantaste tanto?”
- Poner en duda o cuestionar su relato, “¿está seguro/a de lo que me cuenta?”
- Bajarle el perfil o minimizar su experiencia o emociones, como por ejemplo: “menos mal que no fue tan violento, podría haber sido peor, agradezca que sigue con vida”.
- Iniciar una perorata de sus propias experiencias: “su experiencia me hizo recordar una situación que viví hace años, muy parecida”.
- Efectuar preguntas que llevan a responder un sí o un no, que no facilitan la expresión de la víctima.
- Averiguar detalles innecesarios de la experiencia traumática: “¿con cuántas personas tuvo relaciones sexuales?” “¿En qué consistían las relaciones sexuales?”
- Entregar todas las soluciones “adecuadas”: “Mire, lo primero que usted debe hacer es... y luego...”

Con todos los antecedentes y percepciones recabadas en este primer encuentro, el equipo debe evaluar la pertinencia de invitar a la persona a ingresar al proceso del CAVI u ODL, en cuyo caso se deberá realizar todas las coordinaciones necesarias de acuerdo con la revisión y el análisis que el equipo. Es probable que este considere más pertinente derivarla a otra instancia, en cuyo caso es necesario acompañarle en el proceso, es decir, no solo enviándole con una nota de derivación, sino coordinando con quienes sea necesario y establecer claramente el traspaso informado y acompañado.

Ingreso al Sistema de Protección

Posteriormente, *si la persona vulnerada por el delito de trata desea continuar en el proceso de atención y se ingresa al programa*, es fundamental identificar las diversas necesidades e ir apoyándola en este quehacer.

En aquellos casos que la víctima no desee participar de proceso alguno, es relevante señalarle el riesgo que conlleva su decisión y las implicancias que esta podría tener. Igualmente, es necesario realizar gestiones a favor de su protección, orientándola y entregándole información de lugares de apoyo.

Igualmente, es necesario reevaluar el riesgo general y psicosocial, de manera que, conjuntamente, los profesionales que brindarán la atención legal, psicológica y social, levanten un plan de intervención consensuado, que será revisado, analizado y evaluado permanentemente, en lo posible y de acuerdo con la situación en que la víctima se encuentre, que él o ella conozca de qué se trata la intervención, por qué se ha pensado de esta forma, cómo se realizará, entre otros.

A su vez, es necesario despejar y actuar frente a las necesidades de la persona víctima, a modo de guía y simplificando esta ruta que podría ayudar a vislumbrar las necesidades prioritarias, paralelas y posteriores de la persona:

1. La identificación o detección de persona víctima de trata fue mediante:

- Atención en uno de los centros de la CAJ.
- La persona logró escapar de sus tratantes y alguna instancia u organismo la llevó a la CAJ.
- Llegó por una denuncia.
- Fue a través de una investigación de procedimiento policial.

2. Atención o respuesta primaria inmediata a las necesidades urgentes de la persona víctima

- Evaluación diagnóstica en crisis.
- Reevaluación de riesgo.
- Establecimiento de coordinaciones pertinentes. No solo para traspasar informaciones, sino también para ir revisando la situación de la persona en sus distintos ámbitos.
- Revisión y ejecución de gestiones varias: migratorias, salud, comunicación familiar, entre otras que la persona requiera.
- Brindar refugio.

en su manera de actuar —o de defenderse— frente al medio; sin embargo, cada cual es *única/o e irrepetible*, por tanto, el abordaje conjunto de su realidad debe ser también único y especial.

Se pueden tener protocolos, lineamientos de intervención amplios, generales, pero sin dejar de considerar a la persona como centro de su propio proceso. Esto implica respetar su historia, el camino que ha iniciado y su ritmo, realizando cada acción de acuerdo con su propia historia. Si verdaderamente se promueve un proceso metodológico, basado en el enfoque de derechos, cuyo centro es la persona víctima, no es posible efectuar generalizaciones o elaborar *manuales* de intervención. Es posible compartir ideas, técnicas o actividades sin perder el norte: cada una/o es el sujeto y protagonista de su vida, y debemos estar abiertos a descubrir con ellas/os nuevos senderos para la transformación de las injustas y dolorosas situaciones que les ha tocado vivir.

Autocuidado de los equipos que trabajan en atención directa

El desgaste que implica trabajar en un ámbito altamente contaminante de la salud mental por el nivel de daño, abuso, maltrato y contexto adversos en que se encuentran las víctimas que los equipos deben atender, sumado a las, en ocasiones, débiles respuestas de la red social (salud, educación, por ejemplo), implica considerar espacios de trabajo de intercambio y análisis, así como de mantención de la organización de los equipos. A fin de prevenir, transversalmente, el síndrome del Burnout, promoviendo el cuidado a nivel personal y del equipo profesional. Estas son dimensiones claves que se interrelacionan y se ponen en juego en el trabajo cotidiano, por tanto, deben estar presentes. De esta manera, se pueden desarrollar estrategias dirigidas a enfrentar los factores de riesgo poniendo un especial énfasis en el autocuidado individual, el trabajo en equipos y la organización del trabajo. El conjunto de estas acciones permite cautelar la salud mental del recurso humano y la calidad de los servicios prestados a las personas que sufren o han sufrido violencia y explotación. Sin duda, una sesión mensual con un profesional externo, que emplee algunas metodologías específicas para el autocuidado laboral, fortalecerá aquellos elementos que los equipos requieren para evitar el síndrome “quemado”, como la comunicación, la contención, la expresión de emociones en torno al trabajo, entre otras.

Prevención de trata de personas en el marco de la perspectiva de derechos

El concepto de prevención de trata de personas se desprende del concepto propio de prevención de violaciones de derechos humanos y se constituye en una obligación primaria del Estado.

Desde este rol es fundamental comprender que los derechos humanos son un conjunto de normas y preceptos basados en valores que hacen a la condición libre, igual y digna que poseemos todos los seres humanos, sin importar nuestro sexo, raza, religión, condición social, ideas políticas, tradiciones, costumbres o cualquier otra característica. Atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer. Los derechos humanos son obligaciones gubernamentales porque no se materializan espontáneamente por la interacción de las fuerzas de mercado ni por la caridad:

- Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado, es él el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, en consecuencia, solo él puede violarlos.
- No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social son atentados contra los derechos humanos. Pueden ser crímenes, incluso gravísimos, pero si es la mera obra de particulares no será una violación de derechos humanos.
- El Estado puede violar DDHH por acción u omisión.

Estas acciones deben responder necesariamente a: i) garantizar y respetar los derechos humanos, ii) adoptar medidas para hacer efectivos los derechos humanos, y iii) cooperar con supervisión internacional.

Reconocer al Estado como sujeto obligado de protección es reconocer que *las personas que son funcionarios y funcionarias públicas son defensores y defensoras de derechos humanos*.

Es de la propia esencia de la protección internacional de los derechos humanos la contraposición entre los individuos demandantes y los Estados demandados en casos de supuestas violaciones de los derechos protegidos. Con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos, es el propio derecho internacional público el que se enriquece, afirmando la aptitud del derecho internacional público para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de los Estados frente a todos los seres humanos bajo sus jurisdicciones⁷.

7. Antônio A. Cançado Trindade, Voto concurrente Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de Sep. de 1998, Serie C, No. 41, párrafos 5 y 8. Citado en: Soledad Villagra, "Subjetividad jurídica y fuentes" (sin publicar).

Tabla 2. Obligaciones de los Estados frente a los derechos humanos

| | |
|---|--|
| Obligación de garantizar y respetar los derechos humanos | <ul style="list-style-type: none"> • Todo/a ciudadano/a debe disponer de medios judiciales sencillos y eficaces para la protección de sus derechos. • Las violaciones de derechos reconocidos en tratados deben ser ilícitas en el derecho interno. • Se deben prevenir razonablemente situaciones lesivas al derecho protegido, y si se produjeran, obligan a reparar los daños causados, investigar seriamente los hechos cuando esto sea preciso para establecer la verdad, identificar a los culpables y aplicarles las sanciones pertinentes. |
| Obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos humanos | <ul style="list-style-type: none"> • Adecuar el sistema jurídico interno para asegurar la efectividad del goce de dichos derechos. • Organizar una estructura que permita la prevención para evitar —y en su caso castigar— violaciones de derechos humanos, y en caso de que exista una violación de derechos humanos, adoptar las medidas pertinentes para restablecer el derecho o la libertad conculcados. • La estructura por crear es legal e institucional, es decir, medidas tanto legislativas como administrativas y judiciales para hacer efectivos los derechos. Para prevenir tanto la exigibilidad como la repetición de violaciones de derechos humanos que hayan ocurrido. |
| Obligación de cooperar con supervisión internacional | <ul style="list-style-type: none"> • Supone aceptar responsabilidad internacional de los Estados en las violaciones de los derechos humanos; reconocer necesidad de cooperación y supervisión de parte de la comunidad internacional y de organismos internacionales en el cumplimiento de los derechos humanos. • Al suscribir tratados internacionales de derechos humanos, los Estados aceptan el control subsidiario del derecho internacional en el cumplimiento de sus obligaciones. Asumen una serie de requerimientos ante organismos internacionales especializados en derechos humanos: presentar informes, contestar peticiones de casos presentados, permitir la visita de organismos internacionales para la observación del cumplimiento de sus obligaciones en derechos humanos, y cumplir con las recomendaciones de estos organismos. |

Fuente: elaboración propia.

Obligaciones relativas a la prevención de la trata de personas

Desde el Grupo de Trabajo Encargado de los Preparativos para la Cuarta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, se ha presentado recientemente el “Segundo plan de trabajo para combatir la trata de personas en el hemisferio occidental 2015-2018”,⁸ y se han establecido una serie de “Directrices para la prevención” dirigidas a:

1. Articular leyes, políticas y programas destinados a la promoción de la protección de los derechos humanos, la reducción de la pobreza y la marginación, la preven-

8. Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, Comisión de Seguridad Hemisférica, “Segundo plan de trabajo para combatir la trata de personas en el hemisferio occidental 2015-2018”. OEA/Ser. G-CSH/GT/RTP-3/14, 15 de octubre de 2014.

ción de la violencia contra la mujer, la protección integral de los niños, la educación, el trabajo, la migración, la salud y la discriminación, así como el desarrollo económico, entre otros, para prevenir la trata de personas.

2. Identificar grupos poblacionales específicos en situación de vulnerabilidad ante la trata de personas, incluso indígenas y otras poblaciones tradicionales, y adoptar medidas para evitar que las personas de esos grupos sean víctimas de la trata.
3. Implementar medidas para reducir la vulnerabilidad de los niños, con su participación, y asegurar que estén en funcionamiento sistemas amplios para su protección.
4. Implementar campañas de información, concienciación y sensibilización para la sociedad en general y para grupos poblacionales específicos, en cooperación con la sociedad civil, incluso sobre las consecuencias jurídicas de la trata con la finalidad de reducir la demanda de la trata de personas.
5. Ofrecer canales de comunicación, incluso líneas telefónicas gratuitas, de ayuda y denuncia que divulguen informaciones, en diferentes idiomas, incluyendo lenguas indígenas que predominen en los Estados miembros, sobre servicios y acciones de combate a la trata de personas, así como información sobre empleo, políticas migratorias, asistencia psicosocial, de salud y de otro tipo.
6. Formular estrategias y desarrollo de la capacidad para responder rápidamente ante la trata de personas, principalmente para las poblaciones vulnerables, en especial, niños y adolescentes, mujeres, migrantes, comunidades indígenas, público LGBT y personas con deficiencias, entre otras.
7. Adoptar iniciativas de concienciación en los Estados miembros que reciben a las víctimas de trata de personas, con miras a reducir la demanda, entre otros objetivos.
8. Asegurar que los funcionarios de los respectivos gobiernos que participen en las operaciones de paz reciban instrucciones sobre la forma de actuar con relación al problema de la trata de personas para prevenir conductas que faciliten este tipo de delito.
9. Hacer el seguimiento del establecimiento de medidas de supervisión a las agencias de viaje y de empleo en los países de origen, de tránsito y de destino, a fin de evitar que sean usadas en el fomento de la trata de personas e incentivar a esas agencias para que adopten medidas a fin de prevenir ese delito.
10. Asegurar el fortalecimiento de las legislaciones, programas y políticas nacionales, con miras a combatir la corrupción, incluso la corrupción en el contexto de la trata de personas, y garantizar que esos actos sean efectivamente investigados, procesados y sancionados.
11. Fortalecer, de acuerdo con las legislaciones nacionales, los mecanismos de cooperación entre los Estados miembros en lo que se refiere a la investigación judicial, la asistencia jurídica mutua y la extradición.
12. Adoptar medidas de prevención contra la trata de personas focalizando a los trabajadores domésticos y migrantes en lo que respecta a su reclutamiento y contratación.
13. Cuando una persona realiza una denuncia, está brindando información para la investigación policial-fiscal y esa información vincula a otra persona o grupo de personas en la comisión de algún delito o falta administrativa. Exponer los datos o

imagen de quien hace esta denuncia puede comprometer su seguridad frente a cualquier represalia, tanto fiscal como legal, o frente a una contradenuncia o procedimiento que pudiera entorpecer la investigación.

14. Una persona que realiza una denuncia como víctima de un delito o un hecho de violencia contra sí misma o a su familia, comparte información con el personal policial, no con los medios de comunicación. Hay que considerar que al compartir con los medios sus datos o imagen se la expone a ser revictimizada.
15. La revictimización es el proceso por el que se vuelve a hacer pasar a la víctima por situaciones indeseadas. En el sistema policial-judicial ocurre cuando se expone información privada de la investigación, cuando se le exige que se someta a múltiples interrogatorios y exámenes que afectan su dignidad y su sentido de privacidad. Esto también es frecuente en los procesos penales, en los que las autoridades cuando quieren estar seguras que podrán procesar exitosamente al acusado, someten a la víctima a un cuestionamiento extenso y repetitivo para asegurarse que mantenga su historia y tenga credibilidad. El proceso de revictimización es no intencional, pero sí es perjudicial.

Enfoque de derechos

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano desde el punto de vista normativo.

Un enfoque que prioriza a la persona humana está basado en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y protección de dichos derechos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias u otras desigualdades que promuevan la marginalización social o atenten contra el desarrollo social.

En un enfoque de derechos humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están directamente relacionados con un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas y hacer responsables a los que tienen la obligación de respetar y promover los derechos.

Aunque no existe una receta universal para el enfoque basado en los derechos humanos, los organismos de las Naciones Unidas coincidieron en un conjunto de atributos fundamentales:

- Que cuando se formulan las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos.

- Que un enfoque basado en los derechos humanos identifica, por un lado, a quienes son titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les incumben. Además, procura fortalecer la capacidad de quienes son titulares de derechos para reivindicarlos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.
- Que los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar toda la labor de cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación.

En el marco del ámbito de competencia de las Corporaciones de Asistencia Judicial, esto se demuestra con la promoción del personal, las mejoras en su formación y capacitación constante, las mejoras en su calidad de vida y disponibilidad de recursos operativos.

Este enfoque de derechos, no solo se debe reflejar en la manera que el Ministerio de Justicia planifica. En el marco de la comunicación, también se debe reflejar en la forma en la que actúa y comunica esa actuación respetando los derechos procesales de las personas, cuidando no revictimizar a quienes fueron víctimas de un delito o de violencia exponiendo detalles privados, cuidando no exponer la identidad e imagen de personas menores de dieciocho años, o no realizando juicios de valor y actos que pudieran entorpecer la investigación.

Toda persona humana es titular de derechos, todo Estado es portador de deberes

Los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano. Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, posee sus derechos, sin ningún tipo de discriminación. Aún más, los derechos humanos son inalienables, lo cual significa que nadie puede “otorgar” o “quitar” esos derechos y que son igualitariamente aplicables a todo el mundo. La idea de los derechos humanos partió de la necesidad de proteger al individuo contra el uso (arbitrario) del poder del Estado. Esta idea tomó un mayor impulso después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se adoptó la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, seguida por el Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles (1968), el Convenio Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (1968) y otros muchos tratados, convenios y declaraciones.

Todos los tratados de derechos humanos y otros documentos reflejan la noción de que es un deber primordial de los Estados y sus autoridades o representantes el proteger, respetar y fomentar todos los derechos humanos:

- La ley debe proteger todos los derechos humanos. Esto es lo que se conoce como “estado de derecho”. En términos prácticos, esto significa que los Estados tienen el

deber de asegurar que la Constitución y otras leyes están adaptadas a la protección de los derechos humanos, tanto en lo que se refiere a las relaciones entre el Estado y los individuos (ciudadanos o extranjeros) como a las relaciones entre los propios individuos (ciudadanos o extranjeros). Además, cualquier conflicto en relación con estos derechos debe ser presentado para sentencia ante un sistema judicial competente, imparcial e independiente.

- Los Estados tienen el deber de asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y otros representantes de la ley, los ciudadanos, las corporaciones y otros actuantes no gubernamentales que operen dentro de sus límites. Frecuentemente esto significa que el Estado debe abstenerse de actuar, por ejemplo, abstenerse de entorpecer a las personas de reunirse o elegir su propia educación. Sin embargo, a veces esto también significa que el Estado no debería abstenerse de actuar sino emprender la acción. Por ejemplo, invirtiendo en la seguridad de aquellos que desean reunirse libremente o manifestarse, para que no resulten amenazados por aquellos que pudieran tener opiniones distintas.
- Los Estados tienen el deber de asegurar que se fomenten y pongan en práctica los derechos humanos, de tal forma que los individuos puedan disfrutarlos plenamente. Esto implica con frecuencia el desarrollo de políticas adecuadas, la asignación de un presupuesto adecuado y otros recursos propios del Estado, así como la creación de un espacio en el que los actuantes no gubernamentales puedan realizar su trabajo de forma correcta.

La garantía de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad

Las “100 Reglas de Brasilia”⁹ para la garantía de acceso a la justicia de todas las personas en condición de vulnerabilidad no son rigurosamente un tratado, aunque establecen principios orientadores generales para aquellas personas que sean operadoras de justicia.

Son un conjunto de 100 Reglas reconocidas por las más importantes redes del sistema judicial iberoamericano como estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia

9. Las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, fueron adoptadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Desarrollan los principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano (Cancún, 2002), específicamente los que se incluyen en la parte titulada “Una justicia que protege a los más débiles” (apartados 23 a 34). En este proceso han participado las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial: la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Las Reglas parten de la premisa de que el sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, ya que poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Fuente: Cumbre Judicial Iberoamericana. Disponible en: <http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/103>

de las personas en condición de vulnerabilidad. Contienen, por un lado, unos principios de actuación o ideas básicas que deben inspirar la materia, aportando elementos de reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de los sectores más desfavorecidos de la población; y, por otro lado, establecen una serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad en la actuación de los responsables de las políticas públicas judiciales y de los servidores y operadores del sistema judicial.

Son destinatarios del contenido de estas (Regla 24):

- a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial.
- b) Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de administración de justicia de conformidad con la legislación interna de cada país.
- c) Los abogados y otros profesionales del derecho, así como los colegios y agrupaciones de abogados.
- d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de *Ombudsman*.
- e) Policías y servicios penitenciarios.
- f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que estas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social.¹⁰

La Regla 1 define como en condición de vulnerabilidad a “aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. Refuerza esta idea la identificación de características específicas que pueden generar, condicionar o promover esta condición de vulnerabilidad al señalar también que: “Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad”.

10. Fuente: Exposición de motivos de las “100 Reglas de Brasilia para la garantía de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”. Disponible en: <http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/103>

En cuanto a la migración y el desplazamiento como causa de vulnerabilidad, las “100 Reglas de Brasilia” definen:

- Regla 13. El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Se considera trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Asimismo, se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo.
- Regla 14. También pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad los desplazados internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Prohibición de la esclavitud y servidumbre como responsabilidad del Estado

Todos los sistemas de protección de derechos humanos hacen una especial condena a la esclavitud y servidumbre de las personas. En particular, la Convención Americana de Derechos del Hombre establece en su artículo 6 que:

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluso.
3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
 - a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona reclusa en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
 - b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel;

- c) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y
- d) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Esta norma regional es particularmente relevante dado que Chile reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, en consecuencia, se encuentra plausible de ser sometido a su jurisdicción en caso de no proteger, promover o respetar los derechos de las personas que, sin distinción de su condición personal, social o administrativa, se encuentren sometidas a cualquier forma de explotación, trabajo forzado, esclavitud o trata de personas.

Consentimiento dado por la persona que es víctima

La cuestión del consentimiento ha sido materia de discusión a fin de poder determinar el nivel de responsabilidad del Estado frente a una situación de vulneración de derechos. El artículo 29 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre (Pacto de San José) establece tácitamente la prohibición por parte de un Estado o persona (física o jurídica) de limitar o condicionar alguno de los derechos establecidos por la Convención, entendiendo como tales, entre otros, al derecho a la vida, la integridad y la libertad de las personas. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en el caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia,¹¹ que situaciones como el engaño y la coacción psicológica pueden ser una causa de la falta de voluntad para negarse a realizar un trabajo forzoso y constituirse como un falso consentimiento.

En el Protocolo contra la trata de personas también se establece que, a los efectos de esa definición, el consentimiento dado por la víctima no se tendrá en cuenta cuando se haya demostrado el recurso a medios ilícitos. De esa manera, se admite que el ejercicio de la libre voluntad de la víctima a menudo se ve limitado por la fuerza, el engaño y el abuso de poder. Se respeta la capacidad de las personas adultas para tomar decisiones por sí mismas acerca de su vida, concretamente en cuestiones relativas a trabajo y migración. Sin embargo, se excluye la defensa basada en el consentimiento cuando se demuestre que se ha recurrido a medios indebidos para obtenerlo. Asimismo, se excluye la posibilidad de que una persona menor de 18 años pueda dar consentimiento al acto de trata para fines de explotación, haya o no ocurrido dicha explotación.

Principios específicos para la orientación legal y la atención de personas

Es importante enmarcar a la trata de personas como delito principal, y los delitos conexos como fines subordinados al delito principal, entonces, sería definición del principal y de sus conexos o adhesivos: pornografía infantil, desaparición de personas, ex-

11. Corte IDH, caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C, No. 148, párrafo 164.

plotación sexual y laboral, extracción de órganos, prácticas contemporáneas de esclavitud, maltratos, abusos, rufianería, proxenetismo, vinculándolos con los derechos humanos específicos que vulneran todos estos hechos punibles.

Un elemento rector de toda atención es que no se discrimine. En cualquier tipo de procedimiento, y por ninguna razón, el país de origen, la edad, la religión, la raza, el género, la orientación sexual, el oficio como trabajadora sexual, etc., deben ser situaciones que expongan a la persona a la revictimización, la estigmatización o la violación de su privacidad a través de la publicidad sobre su caso, o revelando su identidad, incluyendo a los medios de comunicación.¹²

Por regla general, la persona víctima de trata, tanto interna como transnacional, no es originaria del lugar en donde se realiza la intervención profesional. Es por ello que se debe contar con servicios de interpretación (lingüísticos o culturales) y traducción profesional cuando debidamente se requieran, así como también establecer mecanismos que aseguren el respeto de la confidencialidad y el bienestar emocional de las personas víctimas de la trata, garantizando la atención en recintos seguros sin la presencia de la persona tratante o de personas que no tengan ninguna injerencia durante la declaración o realización de la denuncia.

Este documento está destinado a ser una herramienta de orientación a quienes hacen parte de la primera atención a personas víctimas o potenciales víctimas de trata de personas o de vulneración de derechos vinculados a la migración, en función de la Directriz 2 de las Naciones Unidas relativa a trata de personas y delitos conexos.

12. La referencia al cuidado de la privacidad también incluye la disposición espacial de los lugares de atención directa a personas en oficinas privadas, cubículos o espacios independientes que permitan resguardar la identidad cuando sea necesario y la privacidad suficiente de la consulta o denuncia que se efectúe.

Tabla 3. Directriz 2 de la ONU sobre la identificación de las víctimas de la trata de personas y de los tratantes

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar la posibilidad de:

1. Establecer directrices y procedimientos para las autoridades y los funcionarios competentes del Estado, tales como los funcionarios de policía, de fronteras o de inmigración y otros que participen en la detección, detención y recepción de migrantes en situación irregular o en la tramitación de sus casos, a fin de permitir la identificación rápida y exacta de las víctimas de trata de personas.
2. Impartir capacitación adecuada a las autoridades y los funcionarios competentes del Estado en la identificación de víctimas de la trata de personas y la aplicación correcta de las directrices y los procedimientos a que se hace referencia en el párrafo precedente.
3. Velar por la cooperación entre las autoridades, los funcionarios y las organizaciones no gubernamentales competentes a fin de facilitar la identificación de las víctimas de trata de personas y la asistencia a ellas. Esa cooperación, para que surta los mayores efectos, debe organizarse y ponerse en práctica de manera oficial.
4. Identificar centros de acción adecuados para advertir a los migrantes o posibles migrantes de los posibles peligros y consecuencias de la trata de personas y para recibir información que les permita pedir asistencia si la necesitan.
5. Cerciorarse de que las víctimas de la trata de personas no sean procesadas por infracciones de las leyes de inmigración o por actividades en que participen como consecuencia directa de su situación de tales.
6. Cerciorarse de que las víctimas de trata de personas no sean objeto, en circunstancia alguna, de detención con arreglo a las normas de inmigración ni de ninguna otra forma de detención.
7. Cerciorarse de que existan procedimientos y procesos para recibir y estudiar las solicitudes de asilo que presenten tanto víctimas de trata como de contrabando de personas, y de que se respete y haga valer en todo momento el principio de la no devolución.¹³

Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.¹⁴

13. Limitaciones de la posibilidad de expulsar, deportar o remover a una persona de un estado del cual no es nacional: el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que:

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluso cuando proceda la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos

14. Directrices y Principios recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas por el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social, mayo 2002.

3. Atención y respuesta ante el ejercicio de derechos básicos garantizados por ley o convenciones ratificadas⁶

- Levantamiento de plan de intervención consensuado.
- Proseguir las coordinaciones y apertura hacia instancias que le permitan finalizar estudios, encontrar trabajo, etc.

4. Decisión de permanencia en el país o ciudad de destino

- Decisión de retorno al lugar de origen

El **plan de intervención** consensuado en sus objetivos, acciones y responsables por área de intervención (psicológica, social y jurídica), debería considerar dos aspectos centrales, la *integración social de la víctima*, comprendida como el acceso a las diversas redes, estatales y privadas, a fin de favorecer su inserción paulatina en el medio; en el caso de ser extranjero/a su tramitación de visa, acceso a la salud, beneficios sociales, su incorporación al mundo del trabajo, entre muchos otros.

A su vez, es necesario favorecer en él o ella, la *reelaboración emocional de su experiencia traumática*. Proceso que se inicia con la estabilización o compensación emocional de la víctima, favoreciendo su capacidad para incorporar la categoría del riesgo, así como los factores protectores asociados, potenciando sus propios recursos protectores, reforzando su autonomía y desarrollo personal (autovaloración, autoestima, empoderamiento, habilidades). De este modo, él o ella comienza a elaborar a nivel inicial su historia de violencia, paulatinamente, desnaturalizándola y problematizándola.

La reelaboración o resignificación del trauma implica que la persona vulnerada logre, paulatinamente, visualizarse, inicialmente, como una víctima y no responsable de lo sucedido, transitando hacia la conexión con su vivencia de daño y vulneración, de esta manera se otorga sentido a la historia de vida, al trauma, y se permite abrir una posibilidad de reparación futura, como un/a sobreviviente. Esto comprende una aproximación terapéutica al proceso de reparación, que trasciende el ámbito judicial a través del ejercicio de la sanción y persecución de los tratantes como medio reparatorio para las personas vulneradas por este tipo de delito, previniendo a su vez el fenómeno de la victimización secundaria. Así, es la persona vulnerada quien significa su propia reparación, lo cual implica respetar y favorecer el discernimiento acerca de efectuar o no la denuncia y sus consecuencias en su vida actual y posterior.

Finalmente, es necesario tener presente que cada persona que ha sido vulnerada por el delito de trata, en cualquiera de sus manifestaciones, ha vivenciado experiencias similares de abuso extremo, maltrato, violencia e injusticia, dejándole profundas marcas que, probablemente, se puedan manifestar, de una u otra manera, de forma similar

6. Muchas de estas deberán estar garantizadas vía la política coordinada por el Ministerio del Interior.

Normas internacionales de protección frente a la trata de personas complementarias al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo)

En función de las características principales identificadas¹⁵ en relación con la trata, el tráfico o la vulneración de derechos de personas se presentan las principales normas de protección internacional que protegen a personas en Chile, según las causas de vulnerabilidad en su condición de migración o desplazamiento interno de acuerdo con edad, género y pertenencia a comunidades indígenas.

Tabla 4. Resumen de principales normas internacionales de protección frente a la trata de personas

| | Sistema internacional | Sistema regional | Principios y normas especiales |
|----------------------------|---|--|---|
| Migración y desplazamiento | DUDH: arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 PIDCP: arts. 7, 8 PIDESC: art. 6 CTM: arts. 1, 4, 16.2 | DADDH: arts. 1, 2, 18 CADH: arts. 5, 6, 7, 22.9, 41, 44 PSS: art. 7 | 100 Reglas: reglas 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 OIT, 147 |
| Niñez y adolescencia | DUDH: arts. 1, 2, 3, 4, 5, 10 PIDCP: arts. 7, 8 PIDESC: art. 10.3 CDN: arts. 3, 8, 9, 10, 11, 19, 20 CTM: arts. 1, 4, 16.2, 30 DDPI: art. 17.2 | DADDH: arts. 1, 2, 7, 18 CADH: arts. 5, 6, 7, 19, 41, 44 PSS: art. 7.f | 100 Reglas: reglas 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 24 |
| Género | DUDH: arts. 1, 2, 3, 4, 5, 10 PIDCP: arts. 7, 8, 26 PIDESC: arts. 6, 10.2 CTM: arts. 1, 4, 16.2 CEDAW: arts. 6, 11 DOIG: Arts. 3, 6 | DADDH: arts. 1, 2, 7, 18 CADH: arts. 5, 6, 7, 41, 44 CIVM: arts. 1, 2, 3, 6, 7 | 100 Reglas: Reglas 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 |
| Personas indígenas | DUDH: arts. 1, 2, 3, 4, 5 PIDCP: arts. 7, 8 PIDESC: art. 6 CTM: arts. 1, 4, 16.2 DDPI: arts. 2, 8, 10, 17 | DADDH: arts. 1, 2, 18 CADH: arts. 5, 6, 7, 41, 44 | 100 Reglas: reglas 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 24 OIT 162 |

Fuente: elaboración propia.

La utilización de normas y principios fundamentales de protección internacional se constituye como una herramienta de relevancia al momento de garantizar el acceso a

15. Ver Anexo: Resumen del diagnóstico sobre principales formas de explotación vinculadas a la migración y el desplazamiento interno de personas, realizado en el ámbito de las Corporaciones de Asistencia Judicial entre los meses de abril y mayo del año 2014. IDLO - Programa EUROsociAL II, Acceso al Derecho, Proyecto Prevención de Trata de Personas en Chile.

la justicia por medio del control de convencionalidad en el diseño de estrategias de abordaje y defensa de personas ante instancias administrativas y jurisdiccionales. En la tabla 4 se presenta un resumen de estas normas según causas de vulnerabilidad más comunes vinculadas a trata interna y transnacional.

A continuación se transcribe el texto de los artículos señalados en la tabla 4, agrupando primero a todos aquellos artículos que sean comunes a todas las personas y, en segundo lugar, según causa de vulnerabilidad de derechos.

Protección general a todas las personas frente a la trata

1. Declaración Universal de Derechos Humanos

- a) Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse frateralmente los unos con los otros.
- b) Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.
- c) Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
- d) Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
- e) Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
[...]
- f) Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

- a) Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
- b) Artículo 8.
 - 1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.
 - 2. Nadie estará sometido a servidumbre.

- a. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;
- b. El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;
- c. No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efectos de este párrafo:
 - i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;
 - ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia.
 - iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad;
 - iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- a) Artículo 6.1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

4. Convención para la protección de todas las personas trabajadoras migrantes y sus familiares

- a) Artículo 1
 - 1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
 - 2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.

[...]
- b) Artículo 4. A los efectos de la presente Convención, el término “familiares” se

refiere a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate.

- c) Artículo 16.2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.

5. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

- a) Artículo 1. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
- b) Artículo 2. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de sexo, idioma, credo ni ninguna otra.
[...]
- c) Artículo 18. Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

- a) Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
 - 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
 - 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
 - 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
 - 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
 - 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
 - 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
- b) Artículo 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre
 - 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
 - 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la liber-

tad acompañada de trabajos forzados, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluso.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
 - a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
 - b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel;
 - c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y
 - d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
- c) Artículo 7. Derecho a la libertad personal
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

[...]

- d) Artículo 41. La Comisión [Americana de Derechos Humanos] tiene la función

principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:

- a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
 - b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
 - c. preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
 - d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
 - e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que estos le soliciten;
 - f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
 - g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
- e) Artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

7. 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

- a) Regla 3. Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
- b) Regla 4. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
[...]
- c) Regla 10. A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa.

- d) Regla 11. Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta.
- e) Regla 12. Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo, procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y procurarán garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito.
- [...]
- f) Regla 15. La pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad.
- g) Regla 16. Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación de pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia.
- [...]
- h) Regla 24. Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas:
- a. Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial;
 - b. Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de administración de justicia de conformidad con la legislación interna de cada país;
 - c. Los abogados y otros profesionales del derecho, así como los colegios y agrupaciones de abogados;
 - d. Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de *Ombudsman*.
 - e. Policías y servicios penitenciarios.

- f. Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

Protección de personas migrantes y desplazadas frente a la trata de personas

1. Declaración Universal de Derechos Humanos

- a) Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
- b) Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Artículo 22.9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

3. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)

- a) Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
 - a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;
 - b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
 - c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
 - d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;
 - e. la seguridad e higiene en el trabajo;
 - f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento

para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;

- g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diaria como semanal. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
- h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.

4. 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

- a) Regla 13. El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Se considera trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Asimismo, se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo.
- b) Regla 14. También pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad los desplazados internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Protección de niños, niñas y adolescentes de ambos sexos frente a la trata de personas

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- a) Artículo 10.3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños(as) y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños(as) y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

2. Convención de los Derechos del Niño (y de la Niña)

- a) Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños(as) cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

[...]

- b) Artículo 8. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño(a) a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

- c) Artículo 9. Los Estados partes velarán por que el niño(a) no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño(a). Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño(a) sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño(a).

En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño(a).

Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño(a), o de ambos, o del niño(a), el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño(a) o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño(a). Los Estados partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.

- d) Artículo 10. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño(a) o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.

- e) Artículo 11. Los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños(as) en el extranjero.

Para este fin, los Estados partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.

[...]

- f) Artículo 19. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño(a) contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño(a) se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

- g) Artículo 20. Los niños(as) temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

Los Estados partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños(as).

Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de

guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño(a) y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

3. Convención para la protección de todas las personas migrantes y sus familiares

- a) Artículo 30. Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos(as) de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo.

4. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Artículo 17.2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.

5. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

- a) Artículo 7. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño(a), tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales.

6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

- a) Artículo 19. Todo niño(a) tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

7. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)

- a) Artículo 7.f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida.

8. 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

- a) Regla 5. Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable.

Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.

Protección de personas según su género frente a trata de personas

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- a) Artículo 10.2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

2. Convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres

- a) Artículo 6. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
- b) Artículo 11. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos.

3. Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas

- a) Artículo 3. Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
- b) Artículo 6. Condenamos las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género dondequiera que tengan lugar, en particular el uso de la pena de muerte sobre esta base, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el arresto o detención arbitrarios y la denegación de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud.

4. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

- a) Artículo 7. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño(a), tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales.

5. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará)

- a) Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
- b) Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
 - a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
 - b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
 - c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
- c) Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
[...]
- d) Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
 - a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
 - b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
- e) Artículo 7. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
 - a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
 - b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
 - c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
 - d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

- e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
- f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
- g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
- h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

6. 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

- a) Regla 17. La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.
- b) Regla 18. Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
- c) Regla 19. Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica.
- d) Regla 20. Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones.
- e) Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.
- f) Regla 21. Puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia.

Protección de personas indígenas frente a la trata de personas

1. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

- a) Artículo 2. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los

demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

[...]

- b) Artículo 8. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.

Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

- a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;
- b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos;
- c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
- d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
- e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

[...]

- c) Artículo 10. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

[...]

- d) Artículo 17. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.

Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario.

2. 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

- a) Regla 21. Puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia.

Normas nacionales de protección frente a la trata de personas complementarias al Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo)

Si bien es cierto, desde la expedición del Código Penal chileno existía un tipo penal vinculado a la explotación de seres humanos tal como la promoción o facilitación de la prostitución infantil (figura penal que tristemente se encuentra casi inalterada desde el año 1874,) la legislación nacional nada supo de la existencia del tipo penal de la trata, sino hasta el año 1995, con la publicación de la Ley 19.409 —que en la nomenclatura del proyecto de ley sancionaba la trata de blancas— en la que se creó el artículo 367 bis del Código Penal, norma legal que a la sazón establecía:

El que promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del país para que estas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales.

Sin embargo, se impondrán las penas señaladas en el inciso segundo del artículo anterior en los siguientes casos:

1. Si la víctima es menor de edad.
2. Si se ejerce violencia o intimidación.
3. Si el agente actúa mediante engaño o con abuso de autoridad o confianza.
4. Si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermano, tutor, curador o encargado del cuidado personal de la víctima.
5. Si el agente se vale del estado de desamparo económico de la víctima.
6. Si existe habitualidad en la conducta del agente.

El referido tipo penal se encontraba en el Título VII del libro segundo del Código Penal, dentro de los crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, apareciendo a primera vista que el bien jurídico protegido por el tipo penal era justamente este último, es decir, la moralidad pública. Eso queda de manifiesto en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, toda vez que, en la moción parlamentaria, se pone de manifiesto la existencia de normativa internacional vinculada a la explotación sexual, haciendo caso omiso de aquella referente a la explotación laboral.

Si bien es cierto que la sola existencia del tipo penal significó un avance en materia de cumplimiento de acuerdos internacionales, el tratamiento que se le da al tema es de corte básicamente moralista e implica una invisibilidad absoluta de las víctimas como sujetos de derechos.

Desde la creación del tipo penal en comento y hasta el año 2005 —año en que se ingresó el proyecto de ley que luego se transformaría en la Ley 20.507—, la jurisprudencia

cia era escasa y pobre de contenido, por cuanto la discusión jurisprudencial se centra en la estructura típica, no existiendo discusión acerca de la calidad de las víctimas ni de las circunstancias de vulnerabilidad que las rodeaban.

Es así que en abril del año 2011 se publica la Ley 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. En consecuencia, se crean los artículos 411 ter y 411 quáter del Código Penal, que señalan:

Artículo 411 ter. El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales.

Artículo 411 quáter. El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

El que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito.

En la moción parlamentaria que dio origen a la ley en comento, se deja constancia del hecho de que es deber del Estado de Chile cumplir con los compromisos internacionales adoptados a través de la firma y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus Protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Si bien penalmente no queda explícito en la historia fidedigna del establecimiento de la ley el bien jurídico protegido por ambas normas, el hecho de que se hayan incorporado en el Título VIII del libro Segundo del Código Penal nos da luces respecto de la intención del legislador acerca del hecho de que ahora se trata de delitos contra las personas.

Lo anterior es un avance fundamental respecto a la figura de la “trata de blancas” introducida por la Ley 19.409, que tendía a proteger la moralidad pública, toda vez que no solo se cambia la ubicación que tiene la trata en el Código, sino que además se agregan (en la hipótesis del art. 411 quáter) otras formas de explotación como finalidad de la trata además de la explotación sexual, esto es, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, y la extracción de órganos. Todas formas de explotación que tienen como denominador común la objetivación de la persona humana.

El hecho de que se haga directa alusión en su moción al Protocolo de Palermo, y que se establezcan medidas en favor de las víctimas en la Ley 20.509, habla de un tímido enfoque de derechos en cuanto a las víctimas de la trata de personas.

La protección y el tratamiento de las víctimas de trata de personas

Como se mencionaba anteriormente, la Ley 20.507 introdujo algunas normas que tienden a la protección de las víctimas de este tipo de ilícito, pero antes hay que tener presente el concepto de víctima dado por el ordenamiento jurídico nacional y conocer su estatuto.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 108 del Código Procesal Penal, son víctimas:

Art. 108. Concepto. Para los efectos de este Código, se considera víctima al ofendido por el delito.

En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido y en los casos en que este no pudiere ejercer los derechos que en este Código se le otorgan, se considerará víctima:

- a) al cónyuge y a los hijos;
- b) a los ascendientes;
- c) al conviviente;
- d) a los hermanos, y
- e) al adoptado o adoptante.

Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes.

Por su parte, el legislador reconoce como derechos de todas las víctimas los siguientes:

Art. 109. Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código, y tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

- a) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia;
- b) Presentar querella;

- c) Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible;
- d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que este pidiere o se resolviera la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada;
- e) Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa;
- f) Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiere intervenido en el procedimiento.

Los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos por quien fuere imputado del delito respectivo, sin perjuicio de los derechos que le correspondieren en esa calidad.

Es bien sabido que la protección de las víctimas, por mención expresa de la Constitución Política de la República, corresponde al Ministerio Público, tal y como lo señala el artículo 83 inciso primero de la Carta Fundamental:

Artículo 83. Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

Huelga decir que el carácter de víctima se reconoce desde que comienza la investigación de los hechos que revisten características de delito por parte del Ministerio Público, y esta puede comenzar sea por denuncia, querella o de oficio por el ente persecutor, tal y como lo señala el artículo 172 del Código Procesal Penal.

En ese sentido, no está demás el señalar que conforme lo dispone el artículo 174 del mismo cuerpo legal, los requisitos de una denuncia están claramente establecidos por la ley y son los siguientes:

Artículo 174. Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieran noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante.

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiese firmar, lo hará un tercero a su ruego.

Valga señalar que el delito de trata de personas es de acción penal pública, por tanto, cualquier ciudadano que tome conocimiento de hechos constitutivos de este delito,

puede denunciarlo. Esto significa que no es bajo ningún modo exigible que la denuncia sea hecha por la víctima, toda vez que, de lo señalado anteriormente se desprende que los conceptos de víctima y denunciante se refieren a sujetos distintos y que reciben tratamientos diferenciados por el legislador. De hecho, el denunciante no es considerado interviniente en el proceso penal, y por tanto, no siendo víctima indirecta del mismo (vía inciso segundo del artículo 108 del Código Procesal Penal) carece de estatuto especial alguno.

Entendiendo las características propias del delito de trata de personas, y atendiendo a la especial vulnerabilidad de sus víctimas, esta normativa general no alcanza a proteger todos los derechos consagrados en el artículo 6 del Protocolo de Palermo, motivo por el cual, la Ley 20.509 introdujo las siguientes normas complementarias y especiales para este tipo de víctimas:

Se crea el artículo 78 bis del Código Procesal Penal, que establece:

Artículo 78 bis. Protección de la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas. El Ministerio Público adoptará las medidas necesarias, o las solicitará, en su caso, tendientes a asegurar la protección de las víctimas de estos delitos durante el proceso penal, teniendo presente la especial condición de vulnerabilidad que las afecta.

Cuando se trate de menores de dieciocho años, los servicios públicos a cargo de la protección de la infancia y la adolescencia deberán facilitar su acceso a las prestaciones especializadas que requieran, especialmente, aquellas tendientes a su recuperación integral y a la revinculación familiar, si fuere procedente de acuerdo al interés superior del menor de edad.

En los casos en que las víctimas de los delitos establecidos en los artículos 411 bis y 411 quáter del Código Penal carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que los intereses de las personas menores de edad son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda representarlo, el juez le designará un curador *ad litem* de cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia.

Aunque podemos señalar que se trata de una norma más de aquellas de carácter asistencialistas, es al menos un avance importante en cuanto visibiliza las necesidades especiales de este tipo de víctimas. Asimismo, la ley mantiene la obligatoriedad de los centros de salud públicos y privados de realizar los exámenes médicos que sean pertinentes para el establecimiento del delito, mas no se obliga de modo alguno a través de esta ley a estos establecimiento a prestar la debida atención médica a las víctimas del delito, las que por la naturaleza del mismo, suelen padecer de distintos problemas de salud, los cuales no fueron previstos por el legislador de la Ley 20.509.

Es importante señalar que la Ley 20.509 modificó la ley de extranjería (DL 1.094, de

1975) en cuanto al otorgamiento de visa de residente temporario a las víctimas del delito de trata de personas.

Artículo 33 bis. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no sean nacionales o residentes permanentes en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un periodo mínimo de seis meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su situación legal de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito en sus países de origen.

En este punto, cabe hacer presente que el legislador no se hizo cargo de los costos que implica la tramitación de estas visas, por lo que el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior debe hacer cumplir la normativa vigente y cobrar por el otorgamiento de las mismas, asunto que dificulta la real protección que el Estado de Chile puede dar a estas víctimas.

Si bien es cierto que el legislador fue tímido en cuanto al tratamiento que de parte del Estado de Chile deben recibir este tipo de víctimas, es fundamental tener presente que, al estar en el territorio nacional se hacen acreedoras del catálogo completo de derechos establecidos por el artículo 19 de la Constitución Política de la República; asunto que no puede perderse de vista al momento de intervenir con ellas desde los distintos servicios que presta la Corporación de Asistencia Judicial.

Pautas generales de abordaje psicosocial para la atención de personas potencialmente víctimas de trata

El derecho internacional ha consignado la obligación del Estado, primer garante de derechos, de abordar la violencia contra todos/as aquellos que lo requieran en el país, extranjeros y nacionales, otorgando soluciones integrales para la atención y protección de las víctimas. Chile ha ratificado la mayoría de las Convenciones Internacionales en función a erradicar la Violencia Basada en el Género, la convención y protocolos de los DN; tratados de trabajadores migrantes, entre otros ya mencionados latamente en apartados anteriores.

El delito de trata de personas es una de las manifestaciones más extremas de abuso de poder y violación de los derechos humanos, considerando que constituye una violación del derecho a la vida, la libertad, la seguridad; al derecho a no ser sometida a esclavitud ni a servidumbre; a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; al derecho a la educación, al trabajo, al descanso. A su vez, en la trata de personas se vulnera también el derecho a la igualdad, a la libertad de opinión, de expresión y de reunión.

Las impresionantes dimensiones que ha ido adquiriendo la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas/os, pone cada vez más en disyuntiva a los Estados y la comunidad internacional debido a que, por sus confusas características, su enfrentamiento se ha ido transformando en un desafío complejo de abordar.

El intrincamiento de este hecho criminal radica en la estratégica y bien organizada cadena delictual, generalmente asociada a otros delitos. En la trata pueden participar tanto mafias internacionales como también pequeñas redes locales, ejecutando el circuito de captación, traslado, acogida y recepción de las víctimas, y empleando diversos y eficientes métodos para ello. El principal objetivo de estas operaciones *es la explotación de seres humanos, que puede concretarse en:* explotación sexual, explotación laboral (maquilas, agrícola, maderera, minera, otras), reclutamiento forzoso en casos de conflictos armados, actividades ilícitas, e incluso la comercialización de órganos. Las víctimas, en su mayoría mujeres, niñas/os y adolescentes, provienen, principal, aunque no exclusivamente, de sectores empobrecidos y entornos donde la vulneración de derechos es asunto cotidiano. Esta situación es utilizada por las y los captadores (“enganchadores/as”) quienes, generando un clima de cercanía, seguridad y, sobre todo, un mundo de ensueño, las engañan, valiéndose de la precariedad de sus condiciones de vida, de la desinformación y del legítimo deseo de las personas de tener nuevas, rápidas y mágicas oportunidades para cambiar su vida.

En términos estadísticos, resulta muy difícil calcular la dimensión real de esta vulneración. El carácter en extremo clandestino de esta actividad, así como las sofisticadas redes de protección que se desarrollan en torno a ella, solamente permiten tener aproximaciones. A pesar de ello, hoy nadie pone en duda el incremento de esta “lucrativa actividad criminal”, que atenta contra los derechos humanos fundamentales de las personas. No por azar se le ha denominado como la “esclavitud moderna”, situación que se constata en varios antecedentes recogidos por diversos organismos internacionales.

El *Reporte Global de Trata de Personas*¹⁶ del año 2012, de UNODC, expone que entre el 60 y 75% de las víctimas detectadas por las autoridades son mujeres y niñas, de las cuales entre el 55 y 60% corresponde a mujeres adultas. De este porcentaje, 58% de ellas fueron sometidas a explotación sexual. Debido al alto porcentaje de explotación sexual y a la doble victimización que esto implica, las mujeres se tornan aún más vulnerables a ser víctimas del delito de trata de personas y, específicamente, víctimas del delito con fines de explotación sexual. Sin embargo, no hay que descuidar el aumento de los varones en este delito, generalmente víctimas de trata con fines laborales.

16. Unodc, *Informe global de trata de personas*, Unites Nations Office on Drugs and Crime (Unodc), 2012.

Algunos signos que puede presentar una persona vulnerada por el delito de trata, en cualquiera de sus manifestaciones (laboral, sexual, u otra)

Las víctimas de la trata de personas pueden presentar indicadores que se manifiestan solo en algunas modalidades. Por esta razón, los indicadores que se presentarán a continuación no son suficientes ni concluyentes para que se presente la trata de personas (ONU, 2009; ONG Raíces 2010). A su vez, hay que considerar que no todas las víctimas son extranjeras, la trata interna, de nacionales, es también relevante, especialmente cuando las víctimas son niñas/os o adolescentes; en nuestro país, esta última adquiere especial importancia, considerando que un estudio exploratorio sobre trata de niños/as con fines sexuales arrojó que un 74 % de los ellas/os había sido tratada/o dentro del país¹⁷ (ONG Raíces, OIM, 2007):

Indicadores generales de vulneración de derechos frente a formas de explotación vinculadas a trata de personas

Señales de estar siendo controlada por otra/os

- Estar o tener la impresión de estar obligados por deudas. Adeudar una suma de dinero exorbitante o creciente y no poder pagarla.
- Temor de ser deportada o denunciada por estar “ilegal en el país” (aludiendo a su situación de irregularidad).
- Siente temor de que agredan a su familia de origen ante incumplimiento de demandas.
- Sentir que no puede salir sola de la situación de explotación o desvincularse de esta (personas involucradas en la red).
- La persona siente temor, desconfianza, presión o angustia en el vínculo debido a lo vivido.
- Presenta desorientación e inseguridad por el cambio de rutinas de organización diaria a favor de la explotación, que producen desadaptación de los contextos regulares o formales de funcionamiento social (trabajos día-noche, sin horarios de descanso).

17. La importancia de considerar la trata interna es destacada por diversos autores; por ejemplo, Dottridge en 2008, plantea que en los últimos años parece haberse constatado en diversas regiones el hecho de que la mayoría de los casos de trata, o al menos una proporción significativa de los mismos, están relacionados con situaciones en las que niños/as, adolescentes o adultos son trasladados y tratados dentro de las fronteras de su propio país, es decir, casos de trata de naturaleza interna o doméstica. Expone que las estadísticas sobre trata de personas tienden a concentrarse, total o principalmente, en casos de trata transnacional, como si la evidencia indicase que dichos casos constituyen la mayoría. De hecho, en países muy poblados como China e India, existe evidencia de que el número de niños y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual dentro del país es superior al número de niños y niñas que son objeto de trata hacia el exterior.

so, alimentación, entre otros).

- Permitir que otros hablen por ellas cuando se les dirige la palabra directamente.
- Vivir en viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad.
- No conocer la dirección de su casa o de su trabajo.
- Mantiene en secreto la realidad que vive.

Presenta desarraigo físico y emocional

- La persona se siente desconectada de su cultura y sola por la restricción de contacto con su familia de origen y entorno cercano (llamados telefónicos a significativos, contacto vía medios electrónicos, contacto con otros migrantes, etc.).
- Desconoce el territorio actual, tiene poco manejo para desplazarse en el entorno y para relacionarse con otras personas (salidas autorizadas en horarios y días determinados por el tratante, visitas o encuentros acotados a tiempo predeterminado).
- La persona se siente menoscabada o temerosa ante la posibilidad de contar con protección por ser extranjera o participe de la configuración de un delito.
- Tiene un vínculo afectivo-dependiente con el/la tratante.
- Su libertad se encuentra restringida, pérdida de autonomía (la persona deja que tomen decisiones por ella, que hablen por ella a pesar de estar presente).
- Se siente participe o responsable —culpable— (de forma total o relativa) de la configuración del delito, en niñas/os esta sensación se agudiza.
- No estar en posesión de sus pasaportes u otros documentos de viaje o de identidad, porque estos documentos están en manos de otra persona.
- Tener documentos de identidad o de viaje falsos.

Explotación en el servicio doméstico

- Duermen en espacios compartidos o inadecuados.
- Su empleador denuncia su desaparición, aunque todavía esté viviendo en casa de este.

- No salgan nunca o salgan rara vez de casa por motivos sociales.
- No salgan nunca sin su empleador.
- No se les dé de comer, y cuando se les da, son solo las sobras.
- Estén sujetos a insultos, malos tratos, amenazas o violencia.
- Vivan con una familia, no cuenten con espacios privados.

Explotación sexual

- Ser de cualquier edad, aunque la edad puede variar según el contexto.
- Trasladarse de un burdel a otro o trabajar en diversos locales.
- Ser escoltadas cuando van y vuelven del trabajo, compras, etc.
- Tener tatuajes u otras marcas que indiquen que son “propiedad” de sus explotadores.
- Dormir donde trabajan.
- Vivir o viajar en grupo, algunas veces con otras mujeres que no hablan el mismo idioma.
- La persona presenta lesiones que parecen ser causadas por agresiones.
- No tener dinero propio en efectivo.
- Hay pruebas de que la persona ha mantenido relaciones sexuales sin protección o violentas.
- Hay pruebas de que grupos de mujeres están bajo el control de otras personas.
- Infecciones de transmisión sexual (HIV, hepatitis B, sífilis, etc.).
- Embarazos no deseados y abortos.

Víctimas niñas, niños y adolescentes

En la *trata con fines de explotación sexual donde las víctimas son niñas, niños o adolescentes*, existen otras vivencias y otros signos que se han podido constatar en procesos reparatorios, así como en dos investigaciones realizadas en el país, una exploratoria

(ONG Raíces, OIM, 2007) y una investigación acción participante (IAP), realizada con diez proyectos especializados de reparación del daño a niñas, niños y adolescentes del país (ONG Raíces, ECPAT International, 2010), que si bien no se han indagado con adultos/as, es probable que se puedan asimilar en algunos casos.

A continuación se expone una síntesis de ambas indagaciones.

| Investigación exploratoria en tres regiones del país, 2007 | Investigación Acción Participante (IAP) – no cuantitativo, 2010 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 52 casos • Víctimas fundamentalmente mujeres (94%), edad media 16 años • 74% trata nacional; 13 casos identificados como trata internacional | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los casos registrados, corresponden a mujeres niñas o adolescentes • Tres manifestaciones detectadas: trata con tratante único; trata transitoria y trata “autogestionada” |

Víctimas: factores de riesgo (2007 y 2010)

- La pobreza es, sin duda, un factor de riesgo referido por la gran mayoría de los entrevistados (2007).
- El abandono y la desvinculación de parte de las figuras parentales o adulto significativo es uno de los factores más mencionados por los entrevistados en la I Región (60,5 %) y la RM (31,6 %) (2007).
- Los otros factores están íntimamente relacionados con la falta de seguridad y protección: deserción escolar (90%), explotación sexual comercial de niños, niñas y (personas) adolescentes (ESCNA) (40%), parentalización (33%), consumo de drogas (44%).
- Dinámica de consumo y desvinculación de redes (2011).
- Se concluye: desprotección generalizada (familia, Estado, ciudadanos).

Dinámicas de reclutamiento

Estudio exploratorio 2007 + particularidades estudio 2010

- Promesas de dinero (común en muchos estudios de América Latina).
- Familia y protección. En algunos casos el tratante generó una relación afectiva de pareja con la víctima.
- “Padrinazgo”, se detecta fundamentalmente en la V Región (San Antonio): el padrino o la madrina es el explotador directo y se hace cargo de las necesidades materiales de toda la familia. Los padres protegen al cliente.

- Lugares de contacto: video juegos, en la calle, sauna, avisos en diarios. En Valparaíso y San Antonio: llegada de barcos mueve población desde el interior (rural) e incluso en centros de protección.
- Trasladas en el marco de los efectos de la adicción.
- Gestionan solas el traslado, en contacto con proxeneta del lugar, en contexto de explotación en prostíbulos.

Mecanismos para el control de las víctimas (2007 y 2010)

- El mayor porcentaje (74 %) se identifica con el mecanismo de seducción o engaño y manipulación de la información (otra forma de engaño), y se relaciona con la necesidad de los NNA de buscar figuras protectoras (frecuente promesas de pareja).
- En cuanto a la coacción, situaciones de amedrentamiento y maltrato físico (amenazar explícitamente, golpear).
- Circuito de dependencia.
- En ocasiones el sistema tampoco facilita el rescate y la protección de las víctimas.

Respecto de la construcción de la trata sexual a nivel local

Si bien se reconoce como una modalidad, la trata sexual es prácticamente inexistente en los proyectos especializados de reparación de la ESCNNA. Los equipos plantean la necesidad de conocer sus particularidades. Las chicas involucradas en trata son aquellas que más dañadas están producto de la adicción a la droga, o bien se encuentran en mayor situación de abandono y desprotección. Dada la necesidad de afecto y protección, la mayoría de ellas permanece con el explotador seducida por este en una relación “afectiva” o de “amistad”, que posteriormente pasa a ser más abusiva cortándole todas sus posibles redes, aislándola, quedando aún más dependientes. Su invisibilización y el desconocimiento requieren generar acciones de prevención, sensibilización y formación.

La “propia decisión” para trasladarse a distintos circuitos de temporada lleva a confusiones y desconcierto dado que, generalmente, no se comprende esta respuesta y no se consideran las diversas vulneraciones que han vivido llevándolas a aceptar y asumir con “naturalidad” e incluso a sentirse “merecedora” de esta violenta agresión. Este supuesto consentimiento de una adolescente es uno de los pilares de la naturalización del comercio sexual.

Respecto de la significación que tiene para la víctima

En general, se destacan similares formas de internalizarla, asumiendo gran —sino toda— responsabilidad en la vivencia; algunas/os “naturalizándola” como en *la trata con traslado*, otras/os incluso visualizándola como un “trabajo”, como en *trata “autogestionada”*, en una manifiesta desconexión entre la vivencia y sus emociones —disociación—.

Fuerte lealtad con el explotador: nivel de ensoñación, discurso “esperanzador”, manifestado como una especie de “redención” a través del sueño de la llegada del príncipe azul que la transportará a un lugar diferente, que la sacará de esa situación.

Respecto del entorno

Se podría resumir en el espectador pasivo —y hasta cómplice— de las diversas manifestaciones de explotación sexual (no solo trata) y juzgador de la víctima. Tiende a responsabilizar a las víctimas, asumiendo su total voluntariedad y “elección”.

Dada la fragmentación existente en la comunidad, donde además este tipo de situaciones se visualiza como del “ámbito privado”, se ve distante la posibilidad de que en esta se cuente con grupos humanos con capacidades para actuar como unidad desarrollando acciones de cooperación y colaboración frente a un problema que afecta su ecología, como es la explotación sexual comercial, sin importar el medio por cual la niña o el niño ha sido inducido a ello.

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina



EUROsociAL es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina para la promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a políticas públicas nacionales, y el fortalecimiento de las instituciones que las llevan a cabo. EUROsociAL pretende promover un diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social. Su objetivo es contribuir a procesos de reforma e implementación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la cohesión social. El instrumento del que se dota es el de la cooperación institucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina.

